



Columna



Mauricio Salgado

Inmigración y regularización

Polémica ha generado el anuncio de que el Gobierno estudia una regularización acotada de inmigrantes irregulares en el país. La medida podría beneficiar a unas 180 mil personas que fueron parte del proceso de empadronamiento biométrico que se realizó el año pasado, justificándola con razones económicas y de seguridad.

Sin embargo, el anuncio ha sido rechazado por diversos actores públicos, quienes temen que la medida incentive un mayor flujo migratorio. Más importante aún, no es claro si cuenta con apoyo ciudadano.

La población migrante se ha incrementado fuertemente en los últimos años. Según cifras oficiales, en Chile reside un millón y medio de personas extranjeras, prácticamente el doble de lo registrado el 2017. Este repentino incremento de la población migrante ha sobrecargado las capacidades de procesamiento de varias instituciones del país, desde el resguardo de fronteras y la acción persecutoria de nuevos delitos, hasta la falta de vacantes en escuelas o déficit habitacional en algunas localidades.

Pero este desborde es también interpretativo. La ola migratoria ha sacudido las percepciones de los chilenos sobre los migrantes, haciéndolas más contradictorias.

La encuesta CEP 90 de fines de 2023 daba cuenta precisamente de la dualidad de las percepciones sobre la migración. Mientras una amplia mayoría de los encuestados favorecía un acceso igualitario a prestaciones sociales (como a educación pública o a la atención de salud en el sistema público), independiente del estatuto del inmi-

grante, un 74% de los encuestados declaró tener una mala imagen de los inmigrantes que han llegado al país en los últimos cinco años. De hecho, un 51% de los encuestados opinaron que menos de la mitad o casi ninguno de los inmigrantes que han llegado al país en los últimos cinco años respeta las leyes.

Este mismo sondeo mostró que la visión negativa de la inmigración reciente se profundiza en la macrozona norte del país, donde la densidad de migrantes en relación con la población total es mayor y, por lo tanto, la frecuencia de interacción con inmigrantes es más alta.

El estudio del CEP también mostró que la mayoría de los chilenos prefiere la migración altamente calificada, femenina y sin familiares. Detrás de estas preferencias están la creciente preocupación por la inseguridad (que, en opinión de los encuestados, está vinculada precisamente a la inmigración) y los impactos en las prestaciones sociales que producirían una inmigración de baja calificación, masculina y con familiares dependientes.

El doble desborde de las instituciones para alcanzar sus objetivos y de los marcos interpretativos de las personas podrían hacer que la regularización de inmigrantes que estudia el Gobierno sea resistida por amplios sectores de la población. Para hacer más probable la legitimidad de la regularización, es muy importante que las autoridades privilegien a migrantes con alta escolaridad (de los 180 mil potenciales beneficiarios, un 26% tendría educación superior completa) y ser especialmente restrictivo con quienes tengan antecedentes penales o que hayan cometido delitos en nuestro país.

Mauricio Salgado, investigador CEP